



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

RELACIÓN DE ACUERDOS

Órgano de gobierno

Pleno

Lugar

Madrid

Fecha

19 de diciembre de 2019

Acuerdos adoptados

Uno.- Aprobar el acta de la sesión plenaria ordinaria del día 28 de noviembre del año 2019.

Dos.- Quedar enterado del cumplimiento de los acuerdos adoptados en dicha sesión plenaria.

Tres.- Quedar enterado de los informes de las comisiones y vocales sobre actividades del Consejo en los términos que figuran en el acta.

Cuatro.- 1. Nombrar, de conformidad con los artículos 342 bis, 598.9ª y 599.1.4ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como magistrado competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, de conformidad con el contenido de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, por periodo de cinco años.

2.- Nombrar, al amparo de lo previsto en los preceptos citados, a D. Andrés Martínez Arrieta, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como magistrado sustituto del anteriormente nombrado, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, y por idéntico periodo.

Cinco.- Examinada y debatida la Propuesta de la Comisión Permanente (1.1-22, de 12 de diciembre de 2019) para provisión de plaza de magistrado/a Sala Tercera del Tribunal Supremo, turno general (vacante de Juan Carlos Trillo Alonso), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a Esperanza Córdoba Castroverde, magistrada de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y, actualmente, Jefa de Servicio de Inspección de este Órgano Constitucional.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Esperanza Córdoba Castroverde acredita sobradamente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de magistrada del Tribunal Supremo.

La candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial en el año 1985 y ostenta el nº 472 del Escalafón oficial de la misma. Ha servido en los siguientes destinos: Como jueza, su primer destino fue el Juzgado de Distrito nº 2 de Benidorm (10.05.1985 a 21.01.1987) tras el cual pasó a prestar servicio en el Juzgado de Distrito nº 31 de Madrid (06.02.1987 a 09.01.1989). Como magistrada, prestó servicio en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid (16.01.1989 a 27.11.1991) y desde 05.11.1999 está destinada en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Hay que destacar que Esperanza Córdoba Castroverde fue letrada del Consejo General del Poder Judicial, concretamente Jefe de la Sección de Recursos entre el 20.11.1991 y el 24.11.1999, periodo durante el cual fueron incoados, tramitados y resueltos un total de 2.209 recursos; igualmente, ejerció funciones técnicas en el Servicio de Estudios e Informes participando, entre otros asuntos, en la redacción del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial y en la elaboración del Informe al Anteproyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Desde el 24.02.2014 ostenta la Jefatura del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, habiéndose realizado en este tiempo una profunda reorganización del mismo, lo que posibilitó la obtención del sello de excelencia europea EFQM (European Foundation for Quality Management), convirtiéndose el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en la primera organización española en el ámbito de la Justicia que consigue una certificación europea en esta materia.

En la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, el alto grado de conocimiento y experiencia en las materias propias del orden contencioso-administrativo. En este sentido, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solos la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

La primera es la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 3 de octubre de 2013 (Recurso contencioso-administrativo 70/2013) en materia de asilo. Recurso de casación núm. 3511/2013 que fue desestimado por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 30 de mayo de 2014, formulándose voto particular por dos magistrados/as de la Sala.

La sentencia parte de que la nueva norma de asilo, a diferencia de la anterior, lleva a cabo una regulación más completa del estatuto de refugiado de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

acuerdo con las exigencias introducidas por la normativa comunitaria en materia de asilo, pues si bien la Ley 5/1984 se limitaba a establecer en su artículo 3 la no procedencia de la concesión de asilo a quienes estuvieran comprendidos en algunos de los supuestos previstos en los artículos 1.F y 33.2 de la Convención de Ginebra, sin embargo la nueva normativa, Ley 12/2009, dedica el Título IV al cese y revocación de la protección internacional, regulando de forma pormenorizada las causas que permiten proceder a la revocación de la condición de refugiado, entre ellas, el peligro para la seguridad de España, por lo que colige que el derecho de asilo puede ser revocado en los términos previstos en la Ley de Asilo y las normas internacionales, siempre que concurran los presupuestos legales para ello, lo que seguidamente analiza.

Se examina si existen razones de interés general que justifiquen la revocación de la condición de refugiado que le había sido otorgada al recurrente y, previa cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2008 - rec. num. 66/2006- que recoge que "no es necesario probar o acreditar, mediante una prueba plena y acabada, que el recurrente pertenece a una organización terrorista, esto corresponde a otra jurisdicción, se trata de determinar si concurren "razones fundadas" de constituir un peligro para la seguridad nacional", considera que concurren los presupuestos necesarios para concluir que el recurrente constituye, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, valorando a tal fin los informes obrantes en el expediente. Concluye la Sala que la seguridad nacional puede verse efectivamente comprometida por las acciones del recurrente, expuestas en la sentencia, que revelan una peligrosidad incompatible con la confianza y certeza que ha de proporcionar un Estado democrático a sus ciudadanos.

La sentencia de instancia fue confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de mayo de 2014 que desestimó los seis motivos de casación articulados.

En segundo lugar, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 26 de diciembre de 2013 (Recurso contencioso-administrativo 327/2012), en materia de asilo que no fue recurrida.

La Sala considera que la Administración no motivó suficientemente la aplicación al recurrente de la cláusula de exclusión por ser de alguna manera responsable de delitos contra la humanidad, defecto de motivación que no es meramente formal sino sustantivo lo que comporta la estimación del recurso.

En efecto, se parte de que el solicitante habría sido reconocido como refugiado de no haberle sido aplicada la cláusula de exclusión referida que exige, como se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011, rec. casación 1298/2010, la existencia de "motivos fundados", esto es, dotados de suficiente solidez, y no basados en meras suspicacias o conjeturas, para considerar que el solicitante de asilo ha cometido alguno de esos delitos; motivos fundados que no resultan de la resolución recurrida, toda vez que se



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

abstiene de efectuar toda evaluación individualizada sobre las actividades realizadas por el recurrente. En suma, considera la Sala que si no se exteriorizan las razones por las que el Ministerio del Interior considera que procede la aplicación de la cláusula de exclusión, sustituyéndolas por fórmulas estereotipadas de nulo valor expresivo, es porque realmente carece de serios motivos para su aplicación y consecuentemente para denegar el derecho pedido, pues de haber existido éstos sin duda los habría reflejado con un mínimo de rigor y detalle, tal y como se ha declarado en Sentencias de 27 de diciembre - rec. num. 546/2011 - y 28 de diciembre de 2012 -rec. núms. 574/2011 y 44/2012 -, entre otras.

Finalmente, declara la Sala que el hecho de que la resolución recurrida esté aquejada de una invalidante falta de motivación acerca de la aplicación de la cláusula de exclusión determina, como consecuencia de la declaración de nulidad, otorgar al recurrente el estatuto de refugiado pretendido que le habría sido reconocido por la propia Administración de no haberle sido aplicada inmotivadamente la cláusula de exclusión referida.

En tercer lugar, la candidata nombrada destaca la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 30 de enero de 2014 (Recurso contencioso-administrativo 100/2011), relativa al Impuesto sobre Sociedades. (Recurso de casación núm. 774/2014 que fue desestimado por la Sala Tercera, Sección Segunda, del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 5 de noviembre de 2015).

En un supuesto de escisión de sociedades, la sentencia de la Sala analiza el ejercicio económico en que debe entenderse producida la escisión de la sociedad y, por tanto, aquel en el que la escisión produce efectos fiscales, considerando que de acuerdo con la normativa mercantil, es la fecha de la inscripción de la escisión, y no la fecha en que se otorgó la escritura pública de escisión, la que determina la extinción de la entidad escindida y el traspaso de su patrimonio a las beneficiarias de la escisión, produciéndose con ello el devengo del impuesto que grava la renta derivada de dicha transmisión; ello con independencia de la fecha en que se lleve a cabo la retroacción contable, pues como ha señalado la Sala no debe darse eficacia fiscal a la retroacción contable, de forma que las operaciones realizadas por la escindida desde la fecha en que se ha acordado la retroacción contable, fiscalmente se imputan a la escindida que mantiene su personalidad jurídica hasta la fecha de inscripción de la escritura de escisión.

Asimismo, en relación a la aplicación en forma retroactiva al ejercicio 2000 del precepto en la redacción dada tras la modificación operada por la Ley 14/2000, señala que la exigencia del motivo económico válido se trata de un criterio interpretativo que ya venía recogido en la Directiva 90/434/CEE, transpuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 29/1991, criterio asimismo mantenido por la jurisprudencia comunitaria, que data del año 1997, por tanto, mucho antes de que el concepto de "motivo económico válido" se contemplara



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

en la legislación española, en concreto en la Ley 14/2000. La posición de esta Sala ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de abril de 2011, dictada en el recurso de casación núm. 4939/2007, entre otras.

Se resalta, en cuarto lugar, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 16 de diciembre de 2013 (Recurso contencioso-administrativo 17/2010). Recurso de casación núm. 184/2014 que fue desestimado por la Sala Tercera, Sección Segunda, del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 12 de febrero de 2015). Esta resolución jurisdiccional revisa la resolución del TEAC que desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acuerdo de la Delegada Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que declara la existencia de Fraude de Ley, en relación al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tres ejercicios, y contra el acuerdo de liquidación dictado en ejecución.

En quinto lugar, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 3 de octubre de 2013 (Recurso contencioso-administrativo 277/2010), sobre el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

La Asociación recurrente cuestiona la competencia del Ministro de Hacienda para imponer la presentación de una información adicional que califica de "obligación de información autónoma e independiente de la declaración tributaria".

Parte la sentencia de que el deber de colaboración con la Administración tributaria se impone sin más limitación que la trascendencia tributaria de la información solicitada, así como su obtención por la persona física o jurídica, pública o privada, requerida, bien como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario que pesan sobre ella, bien en mérito a sus relaciones económicas, profesionales o financieras con terceros.

Asimismo, define la trascendencia tributaria, conforme a la línea marcada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de noviembre de 2003 (rec. cas. núm. 1320/2002), como la cualidad de aquellos hechos o actos que puedan ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el art. 31.1 de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia, de acuerdo con la Ley. Y esa utilidad puede ser "directa" (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponible, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la Ley anuda el gravamen) o "indirecta" (cuando la información solicitada se refiere sólo a datos colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponible presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora -que no se olvide, no puede alcanzar a absolutamente todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible- hacia ciertas y determinadas personas).



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Considera la Sala que la información referida se establece por el Ministro en la Orden impugnada como parte integrante de la obligación de declarar, debiendo recordarse que las Órdenes Ministeriales que aprueban modelos de declaración pueden imponer a los declarantes la obligación complementaria de comunicar determinados datos cuyo conocimiento por parte de la Administración tributaria resulte necesario para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias objeto de declaración, lo que resulta congruente con el concepto legal de autoliquidaciones, definidas en el art. 120.1 de la Ley General Tributaria como "declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar".

Al margen de su actividad jurisdiccional, hay que destacar desde una perspectiva discente, que la candidata nombrada está en posesión del curso sobre Comunidades Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores (1994), tiene la titulación de Experto en Derecho Comunitario (1996) y ha superado los cursos de doctorado por la Universidad de Complutense de Madrid (1994/1995). Así mismo, en el ámbito docente, ha sido directora, coordinadora y/o ponente de numerosos cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones, tutora de alumnos de la Escuela Judicial en prácticas (1989 y 1990), miembro del tribunal de promoción a la categoría de Magistrado del orden civil (1995) y del tribunal de oposición Carrera Judicial (2000 a 2010 ambos inclusive).

Todo lo expuesto hace de Esperanza Córdoba Castroverde la magistrada más idónea, de entre los/as propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.

Seis.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (1.1-23, de 12 de diciembre de 2019) para provisión de plaza de magistrado/a de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (vacante de José Manuel Sieira Mínguez), el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda promover a la categoría de magistrada del Tribunal Supremo a Ángeles Huet de Sande, actual magistrada de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y en la capacidad de la candidata nombrada. Sin dejar de reconocer la valía profesional y la excelencia de los/as restantes candidatos/as de la propuesta, la trayectoria profesional de Ángeles Huet de Sande acredita sobradamente su aptitud e idoneidad para ser promovida a la máxima categoría de magistrada del Tribunal Supremo.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

La candidata nombrada ingresó en la Carrera Judicial en el año 1983 y ostenta el nº 255 del Escalafón oficial de la misma. Ha servido en los siguientes destinos:

Como jueza, en el Juzgado de Distrito de Manzanares (01.03.1983-17.12.1983), en el Juzgado de Distrito de San Martín de Valdeiglesias (05.01.1984-11.05.1984) y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Loja (23.05.1984-04.07.1984). Como magistrada: Juzgado de Instrucción núm. 11 de Madrid (23.10.1991-17.10.1995) y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (20.10.1995 a la actualidad).

Hay que destacar que la candidata nombrada fue asesora responsable del Área de Justicia en el Defensor del Pueblo entre los años 1984 a 1995, realizando funciones de asesoramiento técnico jurídico en la labor de supervisión que dicha institución realiza respecto de la administración de justicia, la administración penitenciaria, colegios de abogados y procuradores, notarías y Registro Civil, entre otros. Fue, asimismo, la encargada de la redacción de los capítulos correspondientes de los informes anuales que el Defensor del Pueblo remite a las Cortes Generales.

También fue letrada del Tribunal Constitucional en los años 1995 y 1996 y Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1996 y 2001.

En la designación de la candidata nombrada, el Pleno ha valorado, de manera muy especial, el alto grado de conocimiento y experiencia en las materias propias del orden contencioso-administrativo. En este sentido, tanto la selección general de resoluciones jurisdiccionales como la más específica, de cinco de ellas, demuestran por sí solos la extensión y rigor del conocimiento jurídico de la candidata nombrada, y que quedan comprendidos dentro de un estándar de excelencia jurisdiccional.

En efecto, las cinco resoluciones jurisdiccionales son las siguientes:

1ª) Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de noviembre de 2004 (1392/1999). Dominio Público. Vías Pecuarias. Confirmada por STS de 10 de diciembre de 2007 (recurso nº 869/2005).

El objeto del recurso es una desestimación presunta por silencio de una petición formulada por varias personas a la Comunidad de Madrid sobre desafectación de vías pecuarias.

Se estudia detenidamente la evolución legislativa sobre vías pecuarias desde el siglo XIX (RD de 1892, modificado en 1917; RD-L de 1924; Reglamento de 1944, Ley 22/1974; Ley 3/1995, y Ley 8/98, de la Comunidad de Madrid).

Análisis de las competencias estatales y autonómicas en la materia. Estudio de la desafectación tácita.

Incidencia de las actuaciones expropiatorias realizadas por una Administración diferente a la titular de la vía pecuaria.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Incidencia del planeamiento urbanístico en la configuración del dominio público sobre las vías pecuarias.

Sobrante de vía pecuaria.

Traslado de vía pecuaria por razones de ordenación territorial y por excepcionales razones de interés particular.

Relación con la inscripción en el Registro de la Propiedad de terrenos por los particulares. La sentencia desestima el recurso.

2ª) Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de octubre de 2007 (382/2004) Fauna Silvestre. No recurrida en casación, siendo susceptible de recurso.

El objeto de los recursos acumulados son resoluciones de la Comunidad de Madrid sobre renovación de inscripciones en el Registro de Ejemplares Vivos de Especies Catalogadas de la Comunidad de Madrid de diversos ejemplares de fauna silvestre criados en cautividad (diversas especies de halcones), en las que se sujeta tal renovación a diversas condiciones.

Además de cuestiones de procedimiento, se estudia la regulación de la cría en cautividad de la fauna silvestre en el Convenio CITES y en Reglamentos comunitarios que no agotan la materia, teniendo la Comunidad de Madrid competencia en materia de medio ambiente para regularla, respetando dichas normas comunitarias de directa aplicación.

Se estudia el engarce de la aplicación del Derecho Comunitario con el orden constitucional de distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.

Las leyes estatal y autonómica de fauna silvestre son de aplicación a las especies nacidas y criadas en cautividad.

No obstante, en este caso hay que anular cuatro de las resoluciones impugnadas porque acuerdan la renovación de la inscripción en el registro autonómico de especies catalogadas y cuatro de las especies del actor no son catalogadas, el resto sí.

Además, las diez resoluciones impugnadas no tienen cobertura normativa alguna porque el registro para la inscripción de especies catalogadas carece de regulación reglamentaria por lo que no se pueden imponer a los ciudadanos obligaciones no previstas en una norma como la renovación de la inscripción ni las condiciones a las que la renovación se somete.

El recurso es estimado y anuladas las resoluciones impugnadas.

3ª) Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de junio de 2006 (952/2003). Protección civil. Prevención de incendios. Se desistió del recurso de casación inicialmente interpuesto por la Comunidad de Madrid.

El recurso se interpone por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y tiene por objeto el Decreto 31/2003, de 13 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. El Decreto



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

establece normas de edificación contra incendios que no respetan la norma estatal básica de la edificación contra incendios e invade, por ello, las competencias del Estado en materia de "seguridad pública" (protección civil).

Se estudia la jurisprudencia constitucional sobre la competencia en materia de protección civil. La Comunidad de Madrid tiene competencias concurrentes en esa materia, pero respetando las del Estado que, en este caso, las ha invadido. Estudio de las competencias concurrentes.

Se estudia también la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas-Administración Local, muy especialmente en el ámbito de una Comunidad como la de Madrid, uniprovincial, que ha asumido las competencias de la extinta Diputación Provincial.

El Decreto es parcialmente anulado.

4ª) Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 10 de febrero de 2003 (860/2002). Derecho fundamental de huelga. Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2007, recurso nº 2536/2003.

La sentencia, tras describir el contenido del decreto impugnado (Decreto de la Comunidad de Madrid 102/2002, de 13 de junio, por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002), y del posicionamiento de cada uno de los litigantes, ofrece un resumen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en torno a la exigencia de motivación de los actos administrativos limitativos del derecho de huelga. Partiendo de todo ello, la sentencia proyecta esa doctrina jurisprudencial previamente reseñada sobre el supuesto específico de fijación en un único decreto de los servicios mínimos en una huelga general convocada en la Comunidad de Madrid, y sus planteamientos son íntegramente confirmados por el Tribunal Supremo, tanto en su enfoque general como en relación con cada uno de los servicios analizados.

5ª) Sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha Sentencia de 27 de julio de 2004 (330/1999). Transportes. No recurrida en casación, a pesar de ser susceptible de tal recurso.

El acto impugnado es una decisión de la Administración del Estado por la que se unifican dos concesiones de líneas de autobús interautonómicas con una intraautonómica de la Generalitat de Catalunya.

Se analiza si el Estado al dictar la resolución impugnada ha invadido competencias exclusivas de la Administración autonómica titular de la concesión intraautonómica que se unifica con las concesiones interautonómicas.

Se estudia la distribución constitucional de competencias en materia de transportes terrestres, así como la posibilidad de que la unificación de concesiones esté amparada en un título competencial estatal distinto; asimismo, se analiza la técnica de la "cooperación" (y sus diferencias con la de "coordinación"), como



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

técnica adecuada para resolver cuestiones que afectan simultáneamente a la competencia exclusiva del Estado y a la competencia, también exclusiva, de las Comunidades Autónomas, y las formas de producirse dicha técnica.

También se aborda, entre otras cuestiones, la relativa a la exclusividad sólo de la concesión y no de la prestación del servicio por la modalidad del billete combinado.

Al margen de su actividad jurisdiccional, la candidata nombrada ha sido ponente en diversos cursos y seminarios organizados por varias instituciones, abordando, entre otras materias, la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantías constitucionales del internamiento de enfermos mentales, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre extranjería y asilo o los juicios paralelos.

Todo lo expuesto hace de Ángeles Huet de Sande la magistrada más idónea, de entre los/as propuestos/as, para el desempeño de la plaza convocada.

Siete.- Examinada y debatida la propuesta de la Comisión Permanente (3.1, de la sesión de 2 de diciembre de 2019), para la provisión de una plaza de inspector/a delegado/a del Servicio de Inspección, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda nombrar para la provisión del referido puesto a Javier Mariano Ballesteros Martín.

Javier Mariano Ballesteros Martín, está destinado en la actualidad en la Sección Decimosexta (orden penal) de la Audiencia Provincial de Madrid. El nombramiento para el puesto de inspector delegado del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se realiza por un período de dos años, prorrogable anualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 625.2 de la LOPJ, en su redacción dada por la LO 4/2013, de 28 de junio. Este mismo precepto prevé que el nombrado quedará en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera Judicial durante el tiempo que desempeñe el puesto.

Este nombramiento se fundamenta en los principios de mérito y capacidad en relación con las características del puesto a proveer. Sin desmerecer la valía profesional de los restantes candidatos, el Pleno ha valorado la idoneidad de Javier Mariano Ballesteros Martín para el puesto de inspector delegado del Servicio de Inspección del CGPJ, al considerar que concurren en él, con un carácter prevalente al resto de candidatos, los méritos específicos del puesto de trabajo a desempeñar que se recogen en la convocatoria, habiéndose valorando especialmente su condición de magistrado con amplia experiencia en el área penal, área específica del puesto a proveer.

Accedió por el turno libre en 1988 a la Carrera Judicial habiendo ascendido por antigüedad a la categoría de magistrado el 25 de octubre de 1990, habiendo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

ocupado los siguientes destinos: Juzgado de Distrito de Moguer; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrijos; Juzgado de Instrucción nº 3 de las Palmas de Gran Canaria; Juzgado de lo Penal nº 1 de Toledo; Juzgado de lo Penal nº 1 de Alcalá de Henares; Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid; Sección Nº 4 de la AP de Madrid, encontrándose en la actualidad, tal y como ya hemos adelantado, destinado en la Sección nº 16 de la AP de Madrid.

Tal y como se evidencia de la trayectoria relatada, el nombrado ha prestado servicios la jurisdicción penal durante todo su ejercicio profesional desde que ingresó en la Carrera Judicial, habiendo adquirido plenos conocimientos de las distintas fases por las que atraviesa un procedimiento penal, habiendo adoptado, además, decisiones en diversos procedimientos de especial complejidad.

Junto con lo anterior y en materias discentes, cobra singular relevancia su formación en el ámbito penal asistiendo a más de 36 cursos organizados por el CGPJ, siendo ponente de más de 25 cursos. Igualmente destaca como autor de las siguientes obras jurídicas: "Práctica procesal de los juicios rápidos"; "La intervención de la policía judicial" y Formularios al respecto. Asimismo, es coautor del libro, coordinado por el Magistrado de la Sala Segunda del TS Julián Sánchez Melgar, Práctica Penal (1ª edición, abril de 2003, editado por Sepin).

Otros títulos destacados son también: "La reforma de la LECrim", "La intervención de la Policía Judicial en el Procedimiento Abreviado, juicios rápidos y juicios de faltas según la Ley 38/2002"; "La reforma penal"; "Reflexiones sobre la valoración penal de los incumplimientos del régimen de visitas o impagos de prestaciones económicas en caso de conflicto familiar"; "Protección penal de consumidores y usuarios"; "Reflexiones en torno a la eutanasia"; "Cuestiones relativas a la prisión provisional en el derecho español"; "El arte de juzgar... algo tan humano y la "La responsabilidad de los profesionales sanitarios ante la Justicia": "Reflexiones acerca de cuestiones polémicas relativas al consentimiento informado, responsabilidades y sujeto pasivo de la información." Por último, es también coautor de dos obras más, colaborando de manera activa en la revista jurídica SEPIN.

Destaca también por haber impartido varios cursos tanto en el Servicio de Inspección del CGPJ como en el Colegio de Abogados de Madrid en materia penal. Ha sido tutor de jueces en prácticas en varias promociones y tutor de alumnos en prácticas de la Universidad CEU.

Del mismo modo, el candidato acredita tanto una elevada experiencia como integrante de grupos de trabajo expertos en el ámbito judicial, como en asistencia y participación en reuniones con autoridades judiciales. Merece también una especial mención su experiencia en la elaboración de dictámenes o resoluciones jurídicas así como en la dirección de numerosos equipos de trabajo. Además, ha realizado diversas colaboraciones en materia penal para la revista de la Asociación Profesional de la Magistratura "Deliberación", debiendo ponerse



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

en valor que en el seno de dicha Asociación, ha coordinado varios grupos de trabajo sobre reformas legislativas penales.

Concluyendo, la combinación de todos los elementos descritos debidamente acreditados a través del currículum aportado, junto con la entrevista personal del aspirante, ha llevado al Pleno a considerar que en la persona Javier Mariano Ballesteros Martín, concurre el perfil más idóneo para el desempeño del puesto convocado, sin desmerecer en absoluto la valía profesional del resto de candidatos propuestos.

Ocho.- Nombrar a los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que han de integrar como vocales titulares y suplentes el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la Administración, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial en relación con el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/87, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, que han de actuar en el año 2020, y disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado de estos nombramientos junto con los que ha efectuado el Consejo de Estado respecto de los consejeros permanentes de Estado que han de integrarse también como vocales en el mencionado tribunal:

Vocales titulares: Javier Borrego Borrego e Isaac Merino Jara

Vocales suplentes: Rafael Toledano Cantero y Ángel Ramón Arozamena Laso

Nueve.- Nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo que han de integrar, como vocales titulares y suplentes, la Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y los de la jurisdicción militar, prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que han de actuar en el año 2020, disponiendo su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Titulares:

Sala Primera: María de los Ángeles Parra Lucán y Juan María Díaz Fraile

Sala Segunda: Manuel Marchena Gómez y Ana María Ferrer García

Sala Tercera: Inés María Huerta Garicano y Rafael Toledano Cantero

Sala Cuarta: Jose Manuel López García de la Serrana y Juan Molins García-Atance

Sala Quinta: Ángel Calderón Cerezo y Jacobo López Barja de Quiroga

Suplentes:

Sala Primera: Francisco Javier Arroyo Fiestas

Sala Segunda: Andrés Palomo del Arcos

Sala Tercera: Ángel Ramón Arozamena Laso

Sala Cuarta: Ricardo Bodas Martín

Sala Quinta: Fernando Pignatelli Meca



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Diez.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-16, de 5 de diciembre de 2019), la renovación por un año, con efectos 4 de enero de 2020, del nombramiento de Gustavo Javier Lorca Puerta, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrado de inspección del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Once.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-17, de 5 de diciembre de 2019), la renovación por un año, con efectos 4 de enero de 2020, del nombramiento de Ana Maria Carrascosa Miguel, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como jefa de sección del Servicio de Estudios e Informes del Gabinete Técnico, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Doce.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-18, de 5 de diciembre de 2019), la renovación por un año, con efectos 4 de enero de 2020, del nombramiento de Isabel Rodríguez Zulaica, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como letrada de inspección del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Trece.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-19, de 5 de diciembre de 2019), la renovación por un año, con efectos 11 de enero de 2020, del nombramiento de Santiago Senent Martínez, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como inspector delegado del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Catorce.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-20, de 5 de diciembre de 2019), la renovación por un año, con efectos 4 de enero de 2020, del nombramiento de Silvia Abella Maeso, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa como inspectora delegada del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Quince.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión Permanente (3-21, de 5 de diciembre de 2019), la renovación por un año, con efectos 4 de enero de 2020, del nombramiento de Susana García Santa Cecilia, que continuará prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

actualmente ocupa como inspectora delegada del Servicio de Inspección, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Dieciséis.- Aprobar, por asentimiento, el informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, con las modificaciones aportadas en el acto del Pleno y que constan en Acta.

Diecisiete.- Aprobar, por asentimiento, el informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad de los menores, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.

Dieciocho.- Desestimar el recurso de reposición núm. 204/19, interpuesto por Fernando González Alonso, Capitán Auditor, contra el acuerdo del Pleno de este órgano constitucional, adoptado en reunión del día 28 de marzo de 2019, por el que se nombra Juez Togado del Juzgado Militar Territorial núm. 42 de Valladolid a la Capitán Auditor María de la Paz Rodríguez Márquez.

El presente acuerdo ha sido adoptado por mayoría de los miembros del Pleno, anunciando voto particular José María Macías Castaño.

Diecinueve.- Desestimar el recurso de alzada núm. 378/19, interpuesto por XXX en nombre y representación de XXX, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este Órgano Constitucional adoptado en reunión de fecha 24 de julio de 2019, dictado en el seno del expediente disciplinario núm. 13/2019, instruido por su actuación como titular del XXX, por el que se le impone una sanción de multa de 1.000 €, como responsable de una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por mayoría de los miembros del Pleno, anunciando voto particular Juan Martínez Moya.

Veinte.- Inadmitir la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 425/19, interpuesto por JXXX, en representación de XXX, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano constitucional, por el que se le impone, por su actuación como XXX, una sanción de suspensión de funciones por tiempo de tres meses de duración, como autora disciplinariamente responsable de una infracción muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y una sanción de multa por importe de mil euros (1.000,00 €), como autora igualmente responsable de una falta disciplinaria grave del artículo 418.9 de la misma Ley Orgánica.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Veintiuno.- Inadmitir la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 439/19, interpuesto por XXX contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano constitucional, de fecha 29 de octubre de 2019, por el que se le impone, por su actuación como sustituta en dicho juzgado, una sanción de suspensión de funciones por tiempo de quince días, como autora responsable de una infracción disciplinaria muy grave de desatención en el ejercicio de los deberes judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Orgánica del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Veintidós.- Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada núm. 400/19, interpuesto por XXX, magistrado contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial de 17 de septiembre de 2019, dictado en el seno del expediente disciplinario 149/2019, instruido por su actuación como titular de XXX, por el que se le impone una sanción de suspensión por tiempo de veinte días, como responsable de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El presente acuerdo ha sido adoptado por asentimiento de los miembros del Pleno.

Vº Bº Presidente

Secretario General